



República de Colombia



TRIBUNAL SUPERIOR

Medellín

Sala Quinta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 001 31 05 **010 2019 00462 01**
DEMANDANTE: LUIS CARLOS RESTREPO TORRES
DEMANDADA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA

Medellín, primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2022, por el Juzgado 10° Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se condene a la demandada a reconocer y pagar la pensión de invalidez a partir del 19 de agosto de 2009, fecha de estructuración establecida en el dictamen emitido por la JRCI de Antioquia, más los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 (págs. 3, 43 arch. 1 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que instauró demanda contra el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE y otros, con el fin de obtener el reintegro a sus labores por haber sido despedido en estado de discapacidad, la cual fue ventilada ante el Juzgado 9° Laboral del Circuito de

Medellín, quien le asignó el radicado 2014 01296, proceso dentro del cual se ordenó un dictamen médico con el fin de establecer la merma de la capacidad laboral y determinar el origen y estructuración de la eventual discapacidad; el 20 de febrero de 2019 la JRCI de Antioquia profirió dictamen en el que estableció una PCL del 52% con fecha de estructuración al 19 de agosto de 2009; como consecuencia de ello, el 13 de mayo de 2019 reclamó la pensión de invalidez, la cual fue negada por la demandada el 23 de mayo de 2019 (págs. 2-4, 43 arch. 1 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Prevía subsanación, la demanda fue admitida mediante auto del 20 de septiembre de 2019 ordenándose la notificación y traslado a la demandada (págs. 47 arch. 1 C01) quien contestó en forma extemporánea (archs. 3, 4, 7, 9, 10, 12 C01); de igual forma solicitó la acumulación de procesos con el ventilado ante el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín, con radicado 2014 01296, pero fue negada en auto dictado dentro de audiencia celebrada el 1º de septiembre de 2022 porque no se reúnen los requisitos del art. 148 del CGP, al no existir conexidad entre las pretensiones de ambos procesos, pues en aquel expediente se discute el fuero de salud con base en la jurisprudencia constitucional, según la cual, no pende el mismo de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, tampoco se busca allí la declaratoria de un estado de invalidez (archs. 6, 17, 18 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022, condenó a la demandada a pagar la pensión de invalidez de origen común a partir del 18 de agosto de 2009 en cuantía mínima, cuyo retroactivo calculado hasta el 31 de agosto de 2022 asciende a \$127.743.386, con la autorización de descontar los valores que se hayan pagado efectivamente al demandante por concepto de subsidio por incapacidad temporal, al igual que los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud; ordenó el pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 14 de septiembre de 2019 hasta cuando se efectúe el pago de las sumas adeudadas.

Sostuvo inicialmente el *a quo*, como consideración previa al desarrollo del

problema jurídico planteado y para despachar desfavorablemente la nulidad que Porvenir SA elevó en los alegatos de primera instancia, que no se vulneraron los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, porque no es cierto que hubiera tenido conocimiento de la pericia horas antes de llevarse a cabo la diligencia, ya que la misma fue aportada con la demanda y además se presentó previamente a Porvenir SA, tal y como ese fondo lo expuso en el documento del 23 de mayo de 2019, en el que sostuvo que el dictamen iba a ser valorado por Seguros de Vida Alfa SA, para luego continuar el trámite, sin que Porvenir hubiera efectuado actuación alguna al respecto; agregó que lo que se resuelva en este proceso, no pende de la decisión que se tome en el otro expediente ventilado en el Juzgado 9º Laboral de este circuito, ya que aquí se verificará si el demandante se encuentra en estado de invalidez que lo haga acreedor de la prestación económica derivada del sistema de protección social, por lo que tampoco es viable suspender el presente proceso.

Indicó que afirmar que una persona en situación de invalidez no puede vincularse laboralmente constituye un acto de discriminación, pues las personas en situación de debilidad manifiesta, discapacidad o invalidez pueden vincularse válidamente a la vida laboral sin que ello implique la pérdida de un derecho, por lo que en las normas de seguridad social tampoco aparece como un impedimento el recibir la prestación derivada de la invalidez, y al mismo tiempo un sustento económico derivado de la actividad laboral que pueda ejercitarse con capacidad laboral residual.

Al desarrollar las pretensiones sostuvo que con el dictamen realizado válidamente por la JRCI y allegado oportunamente sin haber sido controvertido, se demuestra que está ajustado en derecho y que las pruebas allí tenidas en cuenta son las mismas aportadas con la demanda y guardan relación con lo encontrado en la historia clínica del demandante, pues la enfermedad base para la invalidez ha estado asociada con problemas del sistema venoso del demandante. Con lo anterior encontró acreditado el estado de invalidez y, por haber cotizado 101.14 semanas entre el 18 de agosto de 2006 y el 18 de agosto de 2009, el demandante reunió los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, resultando ser acreedor de la prestación aquí reclamada, con la advertencia de que si recibió subsidios de incapacidad temporal, no habrá lugar a recibir las prestaciones derivadas de la invalidez, por lo que autorizó el descuento de los valores reconocidos por tal concepto. Fijó como cuantía inicial 1 SMLMV y calculó el retroactivo a razón de 14 mesadas anuales.

Impuso los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, debido a la negativa de la entidad en reconocer la prestación sin reclamar exigencias adicionales a las contemplados en la ley, máxime cuando la solicitud fue radicada con el lleno de los requisitos legales el 13 de mayo de 2019. (archs. 17, 19 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La demandada señaló que se vulneró el debido proceso dado que no tuvo la oportunidad en sede administrativa de hacer la revisión correspondiente a la pérdida de capacidad laboral del demandante, tampoco en sede judicial en este proceso, ni en el que cursó ante el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín; aun cuando no se ordenó la acumulación de procesos, a pesar de que hay conexidad entre las pretensiones invocadas en ambos expedientes porque ante el Juzgado 9º Laboral se pidió un reintegro por fuero de salud, ha debido analizarse la pérdida de capacidad laboral del demandante en este proceso, porque si el demandante retoma sus actividades, implica necesariamente que se encuentra plenamente capacitado para trabajar.

Así las cosas, consideró que no es una discriminación lo que acaeció en aquel proceso, sino que si el demandante pidió un reintegro es porque se siente en la capacidad médica para laborar, mientras que la pensión de invalidez precisamente cubre esa incapacidad e imposibilidad de llevar a cabo funciones en una empresa. Si según el dictamen de la JRCI se estableció que la PCL es del 52%, debió emitirse el concepto desfavorable para que fuera Porvenir SA en primera instancia, y conforme lo establecen las normas legales, la que pudiera hacer la verificación de esa PCL y el origen de la misma.

Sostuvo que la comunicación del 3 de mayo de 2019 fue valorada erróneamente, porque justamente la misma hace referencia a los argumentos aquí expuestos, relativos a que la aseguradora con la que se contrata el seguro previsional es con quien se debe efectuar la calificación en primera instancia, derecho que le fue negado a Porvenir SA, sin que pudiera iniciar ese trámite, ya que solamente con este proceso tuvo conocimiento de ese dictamen, el cual si bien el demandante lo allegó a Porvenir SA, no lo hizo con las formalidades que ello implica, esto es, haber solicitado la pensión de invalidez con el lleno de todos los requisitos a través de un formulario y toda la información que se

requiere para la determinación de la causación de la prestación económica.

Solicitó ser exonerada de los intereses moratorios porque no existe en los archivos de Porvenir SA, una radicación formal de la pensión de invalidez conforme se establece en las disposiciones legales y administrativas junto con las incapacidades médicas y el concepto desfavorable de rehabilitación, dado que es importante conocer exactamente todas la circunstancias médicas y fácticas del demandante para así dar trámite a la solicitud, el que no se puede iniciar con cualquier comunicación. Se opuso igualmente a las costas porque la entidad siempre ha actuado de buena fe, frente a las circunstancias que se le han presentado en este tipo de procesos, y lo único que ha querido es reivindicar su derecho a tener la posibilidad de contradicción y debido proceso.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 21 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022 se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, pero solo presentó alegaciones Porvenir SA, reiterando los argumentos expuestos en la apelación (archs. 2, 3 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación de la demandada, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si a la demandada se le vulneró el debido proceso en relación con el dictamen que tuvo en cuenta el *a quo* para el reconocimiento de la pensión de invalidez; si hay lugar al reconocimiento simultáneo de la pensión de invalidez y del salario que pudiera devengar el demandante como consecuencia del reintegro laboral ordenado por el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín; y, la viabilidad de los intereses moratorios y de las costas procesales.

Debido proceso frente a dictamen de la JRCL.- Lo primero por decir, es que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que el juez laboral debe apoyar su decisión en los dictámenes emanados de las autoridades competentes, con observancia de todo su

contenido informativo, pero también ha adoctrinado que ellos no constituyen prueba reina, definitiva e incuestionable en el marco del proceso ordinario (CSJ SL1035-2022, CSJ SL2558-2023).

El dictamen n.º 078422-2018 sobre el cual se basó el demandante para solicitar la pensión de invalidez que aquí otorgó el *a quo* a cargo de Porvenir SA, fue expedido el 20 de febrero de 2019 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (págs. 31-36 arch. 1, págs.. 621-627 arch. 16.1 C01), en cumplimiento de las órdenes proferidas por el Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín mediante autos del 30 de octubre de 2017 y 7 de septiembre de 2018 dictados dentro del proceso ordinario laboral con radicado 2014 01296, que inició Luis Carlos Restrepo Torres en contra del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE, de Aseo y Sostén Industrial SA-Asindustria en Liquidación, Apoyos Industriales SA y Ayuda Técnica y de Servicios SA (págs.. 550-552, 556-564, 611 arch. 16.1 C01), en el que se decretó tal prueba en favor de la parte demandante y que en la actualidad cursa activo a la espera de la decisión de segunda instancia respecto de los recursos que fueron impetrados contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2020 por el citado juzgado.

De esta manera, si bien Porvenir SA no fue parte dentro del mencionado proceso, y por ende, no pudo controvertir en aquella ocasión la pericia reseñada, esta circunstancia no es suficiente para desestimarla por cuanto el citado fondo sí tuvo más oportunidades para oponerse o refutar lo dictaminado por la JRCI, puesto que, por una parte, el demandante la puso en su conocimiento antes de la presentación de esta nueva demanda¹, mediante el derecho de petición que radicó el 14 de mayo de 2019 en el que expuso en forma clara el motivo por el cual fue proferido el dictamen que anexó con el fin de solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez; al respecto, Porvenir SA se pronunció mediante comunicación n.º 104 del 23 de mayo de 2019 y señaló lo siguiente (págs. 23-27, 29, 30 arch. 1, págs. 33-36 arch. 4, págs. 13-16 arch. 15 C01):

«Los dictámenes de invalidez proferidos sin la intervención de Porvenir y/o la compañía de seguros en los procesos de calificación, no tienen efectos vinculantes para esta administradora por vulneración del derecho de contradicción, por lo tanto, en todo caso, el trámite de calificación debe ser realizado inicialmente ante Porvenir.

¹ El 1º de agosto de 2019 (pág. 1 arch. 1 C01).

Por lo tanto, en el evento en que la Junta Regional de Calificación realice la valoración de PCL y esta sea igual o superior al 50% y de origen común, el caso del señor Restrepo tendrá que ser llevado al grupo interdisciplinario de pérdida de la capacidad laboral y origen, de Seguros de Vida Alfa SA con el propósito de verificar si el dictamen fue emitido conforme al manual único de calificación de invalidez, caso en el cual se continuará con el estudio de la pensión de invalidez; de lo contrario se solicitará una nueva calificación con intervención de la administradora.»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).

En efecto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la pericia que fue adjuntada con la mencionada petición, estableció que el demandante padece de una pérdida de capacidad laboral del 52% como consecuencia de los diagnósticos denominados insuficiencia venosa crónica periférica y síndrome posflebítico, que fueron calificados como enfermedades de origen común, con fecha de estructuración el 19 de agosto de 2009.

No obstante, teniendo la carga probatoria de hacerlo al tenor de lo dispuesto en los arts. 164 y 167 del CGP, Porvenir SA no acreditó que cumplió lo que informó al demandante en la citada comunicación del 23 de mayo de 2019, es decir, haber remitido su caso al grupo interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa SA, para constatar que la pericia de la JRCI haya sido expedida conforme el manual correspondiente por tener una valoración de la PCL «*superior al 50% de origen común*», ni que hubiera solicitado una nueva calificación con su intervención; de ahí que el *a quo* no se equivocó en la valoración probatoria efectuada de esta comunicación, pues lo que se observa es que Porvenir SA fue negligente en su actuar y dejó a la deriva la solicitud elevada por parte del demandante, al margen de que hubiera sido a través de un derecho de petición que, a su albedrío, dejó en suspenso.

Por otra parte, sostiene la apelante que dentro del presente juicio no se le dio el trámite procesal correspondiente al dictamen, sin embargo, la Sala observa todo lo contrario: al haber sido allegada la pericia junto con la demanda, Porvenir SA podía controvertirla solicitando la comparecencia del(os) experto(s) que la realizó(aron) a la audiencia correspondiente, aportando otro concepto o ejecutar ambas actuaciones, lo que debió hacer dentro del término de traslado de la demanda, conforme se establece en los arts. 227 y 228 del CGP, pero no lo hizo, porque bajo su propia voluntad y riesgo no allegó la contestación dentro del tiempo establecido para ello; nótese que a través del auto del 24 de junio de 2022 se tuvo por no contestada la demanda, decisión que fue confirmada el 15 de julio siguiente, toda vez que el escrito respectivo fue enviado al correo electrónico institucional del juzgado el 16 de septiembre

de 2020, a pesar de que la demandada fue notificada personalmente en las instalaciones del despacho el 13 de diciembre de 2019, sin que el término de traslado hubiera sido afectado por las contingencias acaecidas por el Covid-19 (pág. 81 arch. 1, págs. 4-6, 81-86 arch. 4, pág. 1 arch. 7, archs. 3, 10 C01).

Adicional a lo anterior, Porvenir SA desistió del recurso de apelación que le fue concedido en la reseñada providencia del 15 de julio de 2022 (archs. 4, 9-12 C01), y no mostró reparo alguno frente a las decisiones tomadas dentro de la audiencia celebrada el 1º de septiembre de 2022, relativas a no acumular el presente proceso con el surtido ante el Juzgado 9º Laboral de este circuito, la fijación del litigio, la negativa del *a quo* frente a la solicitud efectuada por la demandada para que se le corriera el traslado del dictamen en dicha diligencia luego de haberlo decretado como prueba en favor de la parte demandante, y el cierre del debate probatorio (archs. 17-19 C01).

Y como si fuera poco, a pesar de que no se decretaron pruebas en favor de Porvenir SA debido a que se tuvo por no contestada la demanda, el *a quo* dispuso tener como tales para el expediente y en forma oficiosa, la documental aportada de manera extemporánea con la contestación (arch. 15 C01); empero, de la misma no se vislumbra cuál fue el trámite administrativo interno dado a la petición de reconocimiento pensional elevada por el demandante, ni se aportó algún otro concepto emitido por expertos con el cual se pudieran controvertir las conclusiones a las que arribó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en caso de no haber estado de acuerdo con las mismas. De modo que su desidia fue continua, y claramente no puede ser reprochable en contra de la parte demandante, quien de ninguna manera actuó en forma clandestina.

Además, si se analiza la pericia cuestionada al tenor de lo dispuesto en el art. 61 del CPTSS, junto con el restante material probatorio, incluso el que obra dentro del expediente 009 2014 01296, la misma no infringe en forma alguna la normativa que regula esta clase de actuaciones, dado que se expidió con base en lo dispuesto en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional vigente para esa data (CSJ SL3383-2022), es decir, el establecido mediante Decreto 1507 de 2014 y tuvo en cuenta toda la historia clínica que fue aportada en aquel proceso, de la que se desprende con claridad todos los padecimientos que ha sufrido el actor respecto de su sistema venoso en los miembros inferiores, así como los procedimientos, exámenes clínicos, ayudas diagnósticas, tratamientos a los cuales ha sido sometido, los

medicamentos prescritos y las recomendaciones médicas dadas en su puesto de trabajo (págs. 10-87, 165-173, 567-609 arch. 16.1 C01).

Así las cosas, como con base en las patologías padecidas por el demandante, la JRCI determinó el origen y estableció el porcentaje de PCL regido por las normas técnicas vigentes que regulan la materia, se concluye que el mencionado dictamen contiene todos los fundamentos fácticos, jurídicos, científicos y técnicos previstos en la ley a efectos de ser tenido en cuenta como una prueba idónea y válida, máxime cuando en su contenido se observó lo dispuesto en el art. 40 del Decreto 1253 de 2013 y fue proferido por un ente autorizado legalmente para determinar y señalar el origen del estado de invalidez de una persona al tenor de lo dispuesto en los arts. 41 y 42 de la Ley 100 de 1993 y 1º del Decreto 1507 de 2014, sin que frente a este se hubiera demostrado un error de tal magnitud que lleve al convencimiento de la Sala de que el *a quo* no ha debido tomar en cuenta dicha pericia para efectos de reconocer la pensión de invalidez aquí reclamada.

Con base en lo anterior se concluye que, de ninguna manera se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de Porvenir SA, sino que por el contrario, se le brindaron todas las garantías en sede judicial, y este fondo bajo su propia voluntad tomó la decisión de no controvertir lo determinado por la JRCI, incluso en sede administrativa una vez el demandante le puso en conocimiento la pericia; en consecuencia, al no observarse ninguna falencia en el análisis probatorio que efectuó el *a quo*, se **confirmará** lo decisión al respecto.

Compatibilidad entre mesadas pensionales por invalidez y asignación salarial.- El *a quo* ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 18 de agosto de 2009 con la autorización de descontar lo que se hubiera pagado al demandante por concepto de subsidio por incapacidad temporal y, según el material probatorio aportado al proceso 009 2014 01296 se colige que Luis Carlos Restrepo estuvo incapacitado entre el 10 y el 24 de abril, y del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2017 por el diagnóstico I839 *venas varicosas de los miembros inferiores sin ulcera ni inflamación* (págs. 592, 601 arch. 16.1 C01). Al respecto, la demandada sostiene que no se tuvo en cuenta que, al ser reintegrado el demandante conforme la orden dada en el citado expediente, resultaría incompatible el hecho de recibir salario y mesadas pensionales por invalidez, pues al solicitar en aquel proceso el reintegro al cargo que venía

desempeñando por ser beneficiario del fuero de salud regulado en la Ley 361 de 1997, si retoma sus actividades, implica que se encuentra plenamente capacitado para trabajar.

El Juzgado 9º Laboral del Circuito de Medellín, dispuso en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2020 dentro del proceso ordinario rad. 2014 01296 declarar que entre Luis Carlos Restrepo López y el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE existió un contrato de trabajo bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, vigente entre el 11 de abril de 2006 y el 15 de octubre de 2011, en el cual las sociedades Aseo y Sostenimiento Industrial SA- Asindustria en Liquidación, Apoyos Industriales SA fungieron como intermediarias en la vinculación laboral; también declaró la ineficacia de la terminación de la relación contractual por haber vulnerado lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 361 de 1997.

Como consecuencia de lo anterior, dicho funcionario judicial condenó a la ESE mencionada a reintegrar al demandante a un cargo acorde con las condiciones de salud, con el pago de, entre otras cosas, salarios y prestaciones sociales que dejó de recibir Luis Carlos Restrepo desde el 15 de octubre de 2011 hasta cuando se produzca su reintegro efectivo; así las cosas, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica del hospital allí demandado, es de una empresa social del estado, entidad pública descentralizada de propiedad del Municipio de Medellín, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de ser confirmada la decisión en segunda instancia, el demandante ostentaría la calidad de trabajador oficial debido a las funciones que desempeñó como Operario de Lavandería, pues así se dejó consignado en las consideraciones expresadas por el *a quo* (archs. 14.9, 14.10 subcarp. 16 C01).

De este modo, en caso de ratificarse tal providencia por parte de esta Corporación, el demandante eventualmente tendría que ser reintegrado en las mismas condiciones, es decir, como trabajador oficial al servicio del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE.

No obstante, esa situación no resulta incompatible en modo alguno con la pensión de invalidez que por este proceso se impone a cargo de Porvenir SA, porque no se puede pasar por alto que el art. 40 de la Ley 100 de 1993 dispone que la pensión de invalidez comenzará a pagarse en forma retroactiva, desde la

fecha en que se produzca tal estado; y que el art. 33 de la Ley 361 de 1997, establece que una persona en situación de discapacidad o de invalidez puede ingresar al servicio público o privado, sin que esto implique *«la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no implique doble asignación del tesoro público»*.

Claramente la pensión de invalidez que reciba el aquí demandante no hace parte del erario y si bien para efectos del cálculo del IBL de este tipo de prestaciones, solo es válido incluir las cotizaciones efectuadas hasta antes de la fecha de estructuración de la invalidez, los aportes que el asegurado realice con posterioridad a esa data no se pierden sino que deben incluirse en el haber de cotizaciones en la medida en que estas pueden financiar una eventual pensión de vejez que se consolide con posterioridad, pues la circunstancia de que una persona sea beneficiaria de una pensión de invalidez no es un obstáculo para que continúe trabajando y cotizando al sistema, en tratándose de una pérdida de capacidad laboral parcial con la que se podría desempeñar en una labor acorde con las circunstancias particulares de salud (CSJ 2769-2015, CSJ SL1922-2018).

A lo anterior se agrega que el art. 72 de la Ley 100 de 1993, contempla la posibilidad de que cuando el afiliado se haya invalidado, y se hubiere dado la devolución de saldos por esa contingencia, puede continuar cotizando *«para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez»*.

De modo que, un pensionado por invalidez puede continuar trabajando y cotizando para una eventual pensión de vejez, pues la jurisprudencia ordinaria laboral ha reconocido que el solo hecho que se considere que una persona está en condición de invalidez por superar un determinado porcentaje de pérdida de capacidad laboral, *«no por ello puede asegurarse que siempre se impida ejercer un trabajo en determinadas condiciones y etapas de su vida, según la causa de la invalidez y el oficio o profesión del afectado»* (CSJ SL 15 may. 2006, rad. 26049).

Nótese que, al tenor de lo dispuesto en el art. 54 de la CP, es una obligación estatal el garantizar a las personas que sufran de una condición de discapacidad o de invalidez, un trabajo acorde con sus condiciones de salud, y crear y fomentar la fuente de empleo a través de diversos privilegios que se le conceden a las empresas, verbigracia lo indicado en los arts. 22 y 24 de la Ley

361 de 1997, con el fin de eliminar las barreras que impiden la participación plena y efectiva en el ámbito social y laboral de estas personas; de ahí que resulta desacertada la conclusión a la que arriba la apelante, porque el admitir que no pueden reincorporarse a la fuerza laboral, vulnera su derecho al trabajo enfatizando lo que no pueden hacer, en lugar de resaltar aquello que sí son capaces de ejecutar (CSJ SL5168-2017, CSJ SL3610-2020, CSJ SL3696-2021).

Incluso, a pesar de que según el art. 17 de la Ley 100 de 1993, establece que la obligación de cotizar cesa, entre otras situaciones, cuando el afiliado se pensiona por invalidez o en forma anticipada, ello solo aplica en los eventos en que el pensionado por invalidez, por cualquier razón, no pueda ejercer sus capacidades productivas, dado que si logra integrarse laboralmente no hay motivo alguno que le impida aportar efectivamente al sistema (CSJ SL1922-2018).

En todo caso, tampoco se debe olvidar que la pensión de invalidez es provisional, variable y revisable periódicamente, con el respeto al debido proceso del afiliado, al tenor de lo dispuesto en los arts. 44 y 70 de la Ley 100 de 1993, a fin de determinar si la condición invalidante permanece en el tiempo y, si la causa de la pensión aún existe, o si se debe disminuir o aumentar el monto o incluso la extinción o suspensión de la misma; por consiguiente, como una persona tiene toda la posibilidad de integrarse socialmente y al mercado de trabajo para que ejecute diversas capacidades y habilidades laborales que pueda ofrecer, e incluso recuperar toda o parte de su capacidad laboral (CSJ SL3696-2021, CC C-072-2003), no se equivocó el *a quo* en otorgar la prestación desde la fecha en que lo hizo, lo que conlleva a **confirmar** la sentencia en este aspecto.

Intereses moratorios art. 141 de la ley 100 de 1993.- Estos réditos no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues proceden a fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa (CSJ SL 2772-2021). También nuestro Máximo Órgano de Cierre ha señalado que esta regla no es absoluta, pues existen supuestos en que la negativa puede justificarse (CSJ SL2772-2021), en particular cuando (i) en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (CSJ SL14528-2014) o, (ii) la actuación de la administradora estuvo amparada en el ordenamiento legal

vigente al momento en que se surtió la reclamación, y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de origen jurisprudencial (CSJ SL787-2013).

Sin embargo, ninguno de estas excepciones encuadra en el caso concreto, dado que el reconocimiento pensional está amparado precisamente en una norma vigente y cuya literalidad no generaba dudas sobre su alcance; y aun cuando Porvenir SA sostiene que el demandante debió radicar su petición relacionada con el reconocimiento de la pensión de invalidez a través de un formulario, ha debido indicarle tal situación al demandante en la respuesta otorgada mediante la reseñada comunicación n.º 104 del 23 de mayo de 2019, pero ello no ocurrió.

Además, el art. 40 de la Ley 100 de 1993 en su parte final indica que la pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada, lo que conlleva una carga para el asegurado de aportar junto con la solicitud, los documentos indispensables para el reconocimiento de su derecho, frente a lo que el demandante sí corrió con la carga probatoria de demostrar que solicitó el reconocimiento pensional y para ello aportó el dictamen con el cual basó su petición, sin que a la fecha Porvenir SA hubiera emitido pronunciamiento alguno al respecto frente a la petición del 14 de mayo de 2019. Acorde con lo expuesto, se **confirmará** la decisión recurrida.

Costas procesales.- En lo que respecta a este punto, se debe advertir que de conformidad con lo dispuesto en el art. 365 del CGP la condena en costas se impone a la parte vencida en juicio, sin miramientos relativos a la mala fe o a la temeridad con que hayan actuado las partes, por tanto, las costas no se origina ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra (CC C-157-2013), lo que conlleva a **confirmar** lo decidido por el *a quo*.

En ese sentido, se impondrán costas en la alzada a cargo de Porvenir SA comoquiera que le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación; para tal efecto se deberán incluir como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 1º de septiembre de 2022 por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: Costas en la alzada a cargo de Porvenir SA, como se indicó en la parte motiva.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ep7pRA57ZaxGtd7d_xlqwMMBcbQaKeuirrAwRqCD59azzA?e=abhKTY

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d1a4c2f69dbbf96f1bb4362039db3a6359556346e6148225c4cc974a55bb9884**

Documento generado en 01/04/2024 02:20:03 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>